


USTEDES DEBEN RESOLVER 08001310500320241002000 RE: URGENTE RECURSO DE REPOSICION 08001310500320241002000 RE: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA 2024-10020

Desde Jorge Arturo Rivera Tejada <jriveratejada@hotmail.com>

Fecha Mié 20/11/2024 16:07

Para Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones Tutelas Civil <notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>

 1 archivo adjunto (668 KB)

USTEDES DEBEN RESOLVER 08001310500320241002000.pdf;

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, me permito indicar respetuosamente que ustedes deben resolver, en primer lugar la solicitud la interpuse en el termino y para ello me permito citar lo indicado **EN CASO LLEVADO POR EL SUSCRITO EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA – VALLE DEL CAUCA ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR JUAN CARLOS MONTAÑO CASTILLO CONTRA EL JUZGADO 3º CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, TRÁMITE AL CUAL SE VINCULÓ A LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE BUENAVENTURA, LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SURA ARL Y EL JUZGADO 2º CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA.** **RADICACIÓN:** 76-111-22-13-001-2017-00292-00 **INSTANCIA:** PRIMERA INSTANCIA (2017-1018) **PONENTE:** MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, indico:

Recurrida la decisión, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Buenaventura mediante providencia del 8 de agosto de 2017 revocó la sentencia precedentemente mencionada, al considerar que la situación por la cual se concedió el amparo cambió en virtud a que, en la ampliación de la impugnación presentada por la sociedad accionada, se allegó copia de la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de 2017 sin que se allegara prueba concerniente a que se ejercieron los recursos procedentes contra el mentado acto administrativo *y por lo tanto no le queda otro camino a este despacho que revocar en su totalidad la sentencia No. 052 de Dos Mil Diez y Siete.*

El 14 de agosto del corriente año, Juan Carlos Montaña Castillo solicitó al Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura que decretara la nulidad de las actuaciones surtidas en segunda instancia, porque la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de la misma anualidad aún no se encontraba en firme, habida cuenta que el 8 de agosto de 2017 presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación. El anterior pedimento no fue tramitado por la autoridad judicial hoy accionada, al estimar mediante auto del 16 mismo mes y año que *carece de competencia para suplir la actividad procesal solicitada por parte del tutelante, por cuanto el expediente fue remitido el día 14 del mes y año en curso, a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión y es a esta a que le corresponde decretar la nulidad procesal.*

Del contexto que precede, nitidamente emerge que la presente acción de tutela es improcedente **únicamente** respecto de las pretensiones direccionadas contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura, pues existe identidad en cuanto a sus partes, causa petendi y objeto, sin que en la actual solicitud tuitiva sobresalga una circunstancia nueva que avale la duplicidad de lo pretendido.

Nótese, que en la primigenia acción constitucional impetrada por Montaña Castillo fue dirigida contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura con la intención de lograr su reintegro, al considerar que su despido fue ineficaz al haberse efectuado

Mas adelante indica:

El yerro del juzgador no solo brota al dar por finalizado un trámite en virtud de una resolución que se encontraba en término de ejecutoria y que fue recurrida el mismo día en que se profirió la sentencia de tutela de segunda instancia, sino también al proferir el auto del 16 de agosto de 2017 a través del cual no se pronunció respecto de la solicitud de nulidad elevada por Juan Carlos Montaña Castillo, al estimar que carece de competencia porque remitió el 14 de agosto de 2017 –misma calenda en la que se presentó la solicitud de nulidad- el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior decisión, vulnera las prerrogativas constitucionales de Juan Carlos Montaña Castillo al no resolverse de fondo su solicitud de nulidad de la sentencia proferida en segunda instancia, pues con tal pedimento, en voz de la Corte Constitucional, se busca *ofrecer una garantía ante la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del derecho a la defensa, siempre que exista una circunstancia de tal magnitud que cause la pérdida de eficacia del acto conclusivo del proceso, originando, por justa causa, la inaplicación de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, certeza del derecho y confianza legítima que, por regla general, amparan a la sentencia al ser el acto que finaliza un proceso* (A. 003 de 2011).

Es exactamente el mismo error que ustedes acaban de cometer, pero además les traigo un precedente de su superior funcional y mas cercano en tiempo, en tambien caso llevado por el suscrito el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA UNO DE DECISIÓN LABORAL REF: PROCESO: ORDINARIO LABORAL DEMANDANTE: LUIS EDUARDO DÍAZ CARVAJAL, ROSANA CECILIA BERDUGO ESCAMILLA, MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO SÁNCHEZ, LILIANA PATRICIA COVAS TERÁN, WILMER MAURICIO RICO ELIZALDE Y HÉCTOR ROMERO DAVID ROSERO DEMANDADO: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –SERVICOOPAVA Y MISIÓN TEMPORAL LTDA RADICACIÓN: 08-001-31-05-005-2017-00190-00 BARRANQUILLA, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)**, indico:

Se debe indicar que, previo a avocar el conocimiento del presente proceso, se procedió a examinar cada una de las piezas procesales nuevamente remitidas para que se surta la alzada, advirtiéndose que el a quo remitió el expediente a esta superioridad, sin que se hubiese pronunciado sobre el memorial aportado el 1° de junio de 2021, por el demandante Luis Eduardo Carvajal Díaz, donde se le pone de presente sobre el desistimiento de la apelación del auto que negó la nulidad, el cual aparece inserto en el expediente digital, identificado con el nombre “35. 2017 00190 - DESISTIMIENTO DE NULIDAD” , que aparece suscrito por el doctor Jorge Arturo Rivera Tejada en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, motivado precisamente en el artículo 316 del Código General del Proceso y bajo el argumento de que para el momento de la presentación del memorial, a pesar que se efectuó el reparto, el expediente digital aún no había sido remitido ante el superior.

En virtud de la norma procesal invocada, que textualmente reza: “El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario”,

resulta forzoso devolver el expediente de la referencia, para que el Juzgado de origen, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de desistimiento que se presentara respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la nulidad propuesta por el demandante, memorial que fue recepcionado con fecha anterior a que se remitiera el expediente a esta superioridad mediante el correo electronico enviado el día 28 de junio de 2021.

Con base en lo anterior, por la Secretaría de la Sala, devuélvase las actuaciones al juzgado de origen, para lo de su cargo.

Es el mismo error que hoy cometen por tanto usted debe decidir señor JUEZ.

PRETENSIONES

DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE REPONER EL AUTO FECHADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y ASUMIR CONOCIMIENTO INMEDIATO CON LA PRONTITUD QUE REQUIERE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR PUES NO ES DE RECIBO QUE NO SE TENGA COMPETENCIA DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS INDICADOS.

ANEXOS

- **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA UNO DE DECISIÓN LABORAL REF: PROCESO: ORDINARIO LABORAL DEMANDANTE: LUIS EDUARDO DÍAZ CARVAJAL, ROSANA CECILIA BERDUGO ESCAMILLA, MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO SÁNCHEZ, LILIANA PATRICIA COVAS TERÁN, WILMER MAURICIO RICO ELIZALDE Y HÉCTOR ROMERO DAVID ROSERO DEMANDADO: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –SERVICOOPAVA Y MISIÓN TEMPORAL LTDA RADICACIÓN: 08-001-31-05-005-2017-00190-00 BARRANQUILLA, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).**
- **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA – VALLE DEL CAUCA ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR JUAN CARLOS MONTAÑO CASTILLO CONTRA EL JUZGADO 3º CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA,**

TRÁMITE AL CUAL SE VINCULÓ A LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE BUENAVENTURA, LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SURA ARL Y EL JUZGADO 2º CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA. RADICACIÓN: 76-111-22-13-001-2017-00292-00 INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA (2017-1018) PONENTE: MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 201.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.

Mail: jriveratejada@hotmail.com.

Celular: 3008397537



Jorge Arturo Rivera Tejada

Derecho Laboral Individual y Colectivo, Administrativo Laboral, Laboral Constitucional

jriveratejada@hotmail.com

Celular: 3008397537

De: Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: miércoles, noviembre 20, 2024 2:43 PM

Para: jriveratejada@hotmail.com; Notificaciones Tutelas Civil <notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>

Asunto: URGENTE RECURSO DE REPOSICION 08001310500320241002000 RE: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA 2024-10020

Importancia: Alta

Buena tarde.

Señores

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Se remite el presente correo que contiene el recurso de reposición presentado por el accionante señor Jorge Arturo Rivera, como quiera que la acción de tutela 2024-10020 fue remitida ante esta Honorable Corporación y este Despacho ya no cuenta con el expediente.

Quedamos atentos a la decisión que se tome por esa colegiatura.

Cordialmente,

ANA TOBON
SECRETARIA

De: Jorge Arturo Rivera Tejada <jriveratejada@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 20 de noviembre de 2024 12:35

Para: Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones

Asunto: URGENTE RECURSO DE REPOSICION 08001310500320241002000 RE: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA 2024-10020

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO FECHADO 20 DE OCTUBRE EN EL CUAL REMITEN A LA CORTE SUPREMA**,

I. Competencia del juzgado del circuito

Me permito exponer los argumentos por los cuales la competencia de esta acción de tutela corresponde al Juez del circuito de la jurisdicción ordinaria de la ciudad de Bucaramanga.

- Factores de competencia en relación con acciones de tutela.** La Corte reitera en auto A 191 de 2021 que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, **existen exclusivamente tres factores de competencia** en materia de tutela, a saber: (i) el *factor territorial*^[1], (ii) el *factor subjetivo*^[2] y (iii) el *factor funcional*^[3]. Al respecto, la **Corte de cierre constitucional ha sostenido que, cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, “en virtud del criterio a prevención”**^[4], previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto, por cuanto “*existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover*”^[5].

Manifiesto que vivo en Barranquilla y mi elección de lugar de presentación de pruebas y sede es Barranquilla.

- Tutela contra autoridad administrativa que goza de autonomía administrativa y de ejecución del nivel nacional debe ser repartida a los circuitos. No se demanda al Consejo Superior de la Judicatura.**

Manifiesto que esta demanda **no está dirigida contra el Consejo Superior de la Judicatura** por que las pretensiones del amparo constitucional son de exclusivo resorte y autonomía de la EJLB, pues los hechos que acá se discuten tiene exclusiva relación con la calificación de la subfase general del IX curso de Formación Judicial y sus efectos. Actuación administrativa que el Consejo Superior ni siquiera conoce en segunda instancia. Si bien el Consejo Superior reglamentó la Convocatoria 27 y el IXCurso, no estoy demandando esa reglamentación o sus efectos.

Frente a la naturaleza como autoridad administrativa de la EJLB, la ley 270 Estatutaria de Administración de Justicia establece:

ARTÍCULO 177. ESCUELA JUDICIAL. La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», hará parte del Consejo Superior de la Judicatura, junto con su planta de personal, a partir del primero de enero de 1998 y se constituirá en el centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará su funcionamiento.

...

(Expresiones "la respectiva Sala", y "la Sala Administrativa del Consejo Superior" sustituidas por el artículo 88 de la ley 2430 de 2024).

A su vez el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la naturaleza de la EJLB como es una unidad administrativa del CSJ que goza de **autonomía administrativa y de ejecución** mediante el Acuerdo 800 de 2000 vigente sin modificaciones según lo establece la relatoría del CSJ en

<https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=5548> , veamos:

ARTICULO PRIMERO.- Naturaleza. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley 270 de 1996, es una unidad administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adscrita a la Sala Administrativa.

ARTICULO QUINTO.- Autonomía administrativa y de ejecución. La Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", gozará de la autonomía administrativa, técnica, de ejecución y del gasto para el desarrollo del Plan Anual de Formación y Capacitación de la Rama Judicial previamente aprobado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, podrá delegar en el Director de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", la celebración de todos los negocios jurídicos que se requieran para el cumplimiento de los programas y actividades que forman parte del mencionado plan, en los términos utilizados para los Directores Seccionales de Administración Judicial.

Delo hasta acá expresado se concluye que la directora de la Escuela no es magistrada, ella representa una autoridad administrativa de la naturaleza ya citada.

Las reglas de reparto contenidas en **DECRETO 333 DE 2021** "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del **Decreto 1069 de 2015**, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela" en su artículo ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. determinan:

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo [37](#) del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

(...)

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

La reglamentación antes citada determina que las tutelas dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, en razón a que pretende proteger el rango de un alto tribunal de rango nacional. Pero siendo esta demanda dirigida en contra de la EJLB esa regla no debe ser aplicada pues esta es una **autoridad administrativa** que no tiene la categoría de alto tribunal de rango nacional.

En el contexto de la acción de tutela, **autoridad administrativa** se refiere a cualquier entidad o dependencia del Estado que, en el ejercicio de sus funciones oficiales, pueda afectar los derechos fundamentales de las personas. Esto incluye a entidades o dependencias que emiten actos administrativos, los cuales son manifestaciones de voluntad de la autoridad que buscan producir efectos jurídicos particulares o generales.

La reglamentación de la acción de tutela, sus normas procesales no entienden autoridad administrativa de manera general y en esa categoría están incluidas entidades o dependencia adscritos o vinculadas, pues estas naturalezas no son tenidas en cuenta por el procedimiento de la acción de tutela, La característica que hace que una autoridad administrativa sea demandada en acción de tutela es su capacidad de afectar derechos

fundamentales. En el caso que nos convoca como se ha dicho demandando exclusivamente a la EJLB como autoridad administrativa, con la capacidad de afectar mis derechos fundamentales de manera autónoma y sin intervención de la entidad a la que es adscrita.

Asuntos de procedibilidad.

La procedibilidad de la acción de tutela en el contexto de concursos de méritos es un tema que ha sido abordado por la jurisprudencia, especialmente por la Corte Constitucional (SU 068 de 2022 expedida por hechos de este mismo concurso) y el Consejo de Estado (citadas en la página). La tutela es viable cuando se presenta una flagrante violación de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la igualdad, y el debido proceso, en el marco del concurso de méritos[6]

1. **Excepcionalidad de la Tutela:** La acción de tutela es un mecanismo excepcional que puede proceder en el contexto de concursos de méritos cuando se busca proteger derechos fundamentales que han sido vulnerados y no existe otro medio judicial eficaz para hacerlo de manera rápida y urgente. Esto es particularmente relevante cuando no se ha configurado una lista definitiva que reconozca derechos subjetivos de los participantes[7].
2. **Subsidiariedad e Inmediatez:** La tutela como sabemos solo procede cuando no hay otro medio de defensa judicial disponible, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un **perjuicio irremediable** *Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable..* Además, debe ser un instrumento de protección inmediata para garantizar la guarda efectiva de los derechos fundamentales[8]. O cuando se requiere como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La tutela es procedente cuando los medios judiciales ordinarios no garantizan la inmediatez y eficacia necesarias para proteger los derechos fundamentales involucrados, debido a la complejidad y duración de los procesos contenciosos administrativos[9] La tutela puede proceder cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales del solicitante[10].

Tenga en cuenta **señor(a) juez que de no ingresar prontamente**, así sea de manera transitorio al Subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial, perderé la oportunidad acceder al servicio público en los cargos ofertados porque un proceso ordinario demoraría más de un año y esta subfase terminaría en agosto del año entrante, porque aunque la justicia ordinaria conceda las pretensiones es un sobre costo para el estado volver a abrir un curso de formación máxime cuando este ha generado un costo de 14 millones de pesos[11] y en el hay capacidad para 3459 beneficiarios y en la actualidad en la subfase especializada son beneficiarios de del IX Curso entre 1500 y 2000 concursantes, se puede concluir que mi inclusión transitoria en el IX curso no afecta fiscalmente a la entidad[12].

LA **SU 067 de 2022** expedida por hechos generados por este mismo concurso advierte que es procedente acción de tutela cuando **existe un planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo**. Advierto señor juez que el conflicto constitucional que acá se discute tiene dos asuntos constitucionales que desbordan las competencias del juez administrativo, veamos:

El primero es sobre el cumplimiento de una cláusula constitucional contenida en el Art. 125 superior que obliga a que los cargos de jueces y magistrados de tribunales deben ser seleccionados por sistema de méritos. Cabe resaltar señor(a) juez que los actuales aprobados de la convocatoria 27 no alcanzan para proveer la totalidad de las actuales vacantes.

El segundo problema de relevancia constitucional es la materialización de la independencia judicial[13], como garantía del estado de derecho o derecho humano contenido en el 228 superior. El precedente del SIDH ha establecido que la independencia judicial es un derecho humano autónomo de los justiciables, que materializa la expedición de decisiones justas. La independencia judicial es una garantía institucional e instrumental, pues de ella depende la garantía de otros derechos, como el de acceso a la justicia y al debido proceso[14].

El SIDH desarrolla estándares de la independencia judicial entre ellos los siguientes:

1. Adecuados procesos de nombramiento con garantías de objetividad y por sistema de méritos. En [2009 la Relatoría especial misión Colombia para la independencia alertó](#) sobre los índices de provisionalidad y los sistemas de méritos, para la época (2009) sobre todo en Fiscalía General de la Nación[15]. Se advierte que en la actualidad más o menos la tercera parte de los cargos de jueces están en provisionalidad. Las altas provisionalidades en la justicia no le dan garantía al operador judicial en el ejercicio de función.

2. Inamovilidad en el cargo: la provisionalidad impone en el juez una carga de eventual remoción del cargo, afectando con ello la independencia judicial, en Colombia se ha detectado que los jueces en propiedad no logran llegar a ser magistrados de alta Corte. Las recomendaciones de la relatoría por la independencia judicial antes citada expresaron al respecto:

e) En lo que respecta a la seguridad en el cargo, la inamovilidad, las medidas disciplinarias y la inmunidad:

- i) Debe irse progresivamente incrementando el número de jueces y fiscales con nombramientos permanentes;
- ii) Debe reducirse la participación de personas ajenas a la Rama Judicial en el nombramiento de jueces y fiscales;
- iii) Debe establecerse garantías específicas para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales durante el período de prueba posterior a su nombramiento;
- iv) Debe asegurarse la inamovilidad de Magistrados, jueces y fiscales;

A/HRC/14/26/Add.2
Página 29

- v) Deben desarrollarse criterios para el retiro de Magistrados y jueces;
- vi) Toda decisión relativa a la imposición de una medida disciplinaria debe ser motivada, pública y sujeta a revisión.

3. Garantía contra presiones externas, Colombia tiene alertas al respecto. Medios de comunicación, el gobierno, otros jueces. Se detectaron casos de jueces destituidos por una causal disciplinaria que se denominaba “error judicial inexcusable”

Como podrá apreciarse señor juez constitucional el amparo de estos dos asuntos constitucionales no es de competencia del juez administrativo. Y menos en lo relacionado con los concretos hechos que acá expongo y desde la individualidad, pues la pretensión que me ampararía mis derechos tendría como finalidad demandar al legalidad de 2 actos administrativos que me calificaron el examen de la subfase general con la finalidad de aprobar esta subfase o demandar todo la actuación administrativa llamada IX curso de Formación Judicial con los costos fiscales que ello implique.

En su momento la **SU 067 de 2022** considero procedente la acción de tutela y expresó:

Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo.

Finalmente, la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»^[16].

3. Protección de Derechos Fundamentales: En el marco de un concurso de méritos, está en juego el derecho de acceso al trabajo. Por lo tanto, el concurso debe ser visto con rigor constitucional, y las controversias sobre la protección de derechos fundamentales deben ser resueltas de manera pronta y eficaz, lo cual generalmente se logra a través de la tutela^[17].

4. Regla General de Improcedencia y Excepciones: Aunque la regla general es la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan concursos de méritos, existen excepciones cuando se trata de proteger derechos fundamentales en situaciones concretas que afectan los presupuestos del Estado social de derecho[18].

En resumen, la acción de tutela puede ser procedente en concursos de méritos cuando se busca proteger derechos fundamentales y no existe otro medio judicial eficaz. Sin embargo, su uso debe ser excepcional y justificado por la urgencia y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.

PRETENSIONES

DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE REPONER EL AUTO FECHADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y ASUMIR CONOCIMIENTO INMEDIATO CON LA PRONTITUD QUE REQUIERE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.

Mail: jriveratejada@hotmail.com.

Celular: 3008397537



Jorge Arturo Rivera Tejada

Derecho Laboral Individual y Colectivo, Administrativo Laboral, Laboral Constitucional

jriveratejada@hotmail.com

Celular: 3008397537

De: Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: miércoles, noviembre 20, 2024 12:21 PM

Para: Notificaciones Tutelas Civil <notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>; jriveratejada@hotmail.com

Asunto: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA 2024-10020

Importancia: Alta

Barranquilla, 20 de noviembre de 2024.

SEÑORES:

ASUNTO: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA RAD: 2024-10020

CORDIAL SALUDO:

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en la providencia adjunta, se les notifica la misma, a la luz del artículo 16 del decreto 2591 de 1991.

Se adjunta a la presente, copia de la providencia y piezas procesales del expediente.

Atentamente,

GRAYZHELL QUINTERO
OFICIAL MAYOR.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

[1] Auto 550 de 2018. En virtud del factor territorial, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o donde se producen sus efectos, son competentes para conocer, “a prevención”, del trámite de las acciones de tutela.

[2] Auto 550 de 2018. Con fundamento en el factor subjetivo, corresponde: (i) a los jueces del circuito, el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.

[3] Auto 550 de 2018. El factor funcional “*debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia*”.

[4] Auto 018 de 2019. Cfr. Autos 222 y 010 de 2020, 068 de 2018 y 053 de 2018, entre otros.

[5] Autos 074 de 2016 y 277 de 2002.

[6] CE-11001-03-15-000-2014-03142-01(AC)-2015 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil quince (2015) Actor: MARTHA YULIANA CUENCA SANCHEZ

[7] CE-11001-03-15-000-2014-03437-00(AC)-2015, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO (E) Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Actor: JEFERSON ALEXANDER CRUZ HERRERA

[8] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01917-01(AC) Actor: RUBEN DARIO MAYA BEDOYA

[9] CE-05001-23-33-000-2017-00471-01(AC)-2017 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00471-01(AC) Actor: LEIDY MILENA VILLADA FERNÁNDEZ

[10] CE-25000-23-41-000-2014-00904-01(AC)-2014, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00904-01(AC) Actor: LUIS ALBERTO SANDOVAL NAVAS Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

[11] <https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.991325%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse>

[12] Argumento que desarrollé y probé en la solicitud de la medida cautelar.

[13] Exposición sobre el impacto de la selección de jueces por sistema de méritos en la independencia judicial hecha por la Dra. Tania Luna Blanco el 19 de noviembre de 2024 que puede consultar en <https://drive.google.com/file/d/1oYk6qtE8gMqddIMUotaGkauWfKyoLXk4/view?usp=sharing> o en <https://www.youtube.com/live/XXKhFY7Cijg> a partir del minuto 2.50.

[14] Casos en el sistema interamericano, 1. [Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá Ficha técnica](#)

2. Tribunal Constitucional Vs. Perú 3. Caso Apitz Barbera y otros Ficha técnica y 4.

Reverón Trujillo Vs. Venezuela

[15] <https://www.dejusticia.org/independencia-judicial-y-democracia/>

[16] En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.

[17] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil trece (2013). Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00200-02(AC) Actor: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA

[18] CE-11001-03-15-000-2019-00477-00(AC)-2019 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00477-00(AC) Actor: AUSBERTO RODRÍGUEZ MORA Demandado: PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO
DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL, ADMINISTRATIVO LABORAL, DERECHO DE TRANSITO

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, me permito indicar respetuosamente que ustedes deben resolver, en primer lugar la solicitud la interpuse en el termino y para ello me permito citar lo indicado **EN CASO LLEVADO POR EL SUSCRITO EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA – VALLE DEL CAUCA ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR JUAN CARLOS MONTAÑO CASTILLO CONTRA EL JUZGADO 3º CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, TRÁMITE AL CUAL SE VINCULÓ A LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE BUENAVENTURA, LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SURA ARL Y EL JUZGADO 2º CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA.****RADICACIÓN:** 76-111-22-13-001-2017-00292-00 **INSTANCIA:** PRIMERA INSTANCIA (2017-1018) **PONENTE:** MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, indico:

Recurrida la decisión, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Buenaventura mediante providencia del 8 de agosto de 2017 revocó la sentencia precedentemente mencionada, al considerar que la situación por la cual se concedió el amparo cambió en virtud a que, en la ampliación de la impugnación presentada por la sociedad accionada, se allegó copia de la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de 2017 sin que se allegara prueba concerniente a que se ejercieron los recursos procedentes contra el mentado acto administrativo *y por lo tanto no le queda otro camino a este despacho que revocar en su totalidad la sentencia No. 052 de Dos Mil Diez y Siete.*

El 14 de agosto del corriente año, Juan Carlos Montaña Castillo solicitó al Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura que decretara la nulidad de las actuaciones surtidas en segunda instancia, porque la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de la misma anualidad aún no se encontraba en firme, habida cuenta que el 8 de agosto de 2017 presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación. El anterior pedimento no fue tramitado por la autoridad judicial hoy accionada, al

estimar mediante auto del 16 mismo mes y año que *carece de competencia para suplir la actividad procesal solicitada por parte del tutelante, por cuanto el expediente fue remitido el día 14 del mes y año en curso, a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión y es a esta a que le corresponde decretar la nulidad procesal.*

Del contexto que precede, nitidamente emerge que la presente acción de tutela es improcedente **únicamente** respecto de las pretensiones direccionadas contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura, pues existe identidad en cuanto a sus partes, causa petendi y objeto, sin que en la actual solicitud tuitiva sobresalga una circunstancia nueva que avale la duplicidad de lo pretendido.

Nótese, que en la primigenia acción constitucional impetrada por Montaña Castillo fue dirigida contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura con la intención de lograr su reintegro, al considerar que su despido fue ineficaz al haberse efectuado

Mas adelante indica:

El yerro del juzgador no solo brota al dar por finalizado un trámite en virtud de una resolución que se encontraba en término de ejecutoria y que fue recurrida el mismo día en que se profirió la sentencia de tutela de segunda instancia, sino también al proferir el auto del 16 de agosto de 2017 a través del cual no se pronunció respecto de la solicitud de nulidad elevada por Juan Carlos Montaña Castillo, al estimar que carece de competencia porque remitió el 14 de agosto de 2017 –misma calenda en la que se presentó la solicitud de nulidad- el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior decisión, vulnera las prerrogativas constitucionales de Juan Carlos Montaña Castillo al no resolverse de fondo su solicitud de nulidad de la sentencia proferida en segunda instancia, pues con tal pedimento, en voz de la Corte Constitucional, se busca *ofrecer una garantía ante la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del derecho a la defensa, siempre que exista una circunstancia de tal magnitud que cause la pérdida de eficacia del acto conclusivo del proceso, originando, por justa causa, la inaplicación de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, certeza del derecho y confianza legítima que, por regla general, amparan a la sentencia al ser el acto que finaliza un proceso* (A. 003 de 2011).

Es exactamente el mismo error que ustedes acaban de cometer, pero además les traigo un precedente de su superior funcional y mas cercano en tiempo, en tambien caso llevado por el suscrito el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA UNO DE DECISIÓN LABORAL REF: PROCESO:**

ORDINARIO LABORAL DEMANDANTE: LUIS EDUARDO DÍAZ CARVAJAL, ROSANA CECILIA BERDUGO ESCAMILLA, MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO SÁNCHEZ, LILIANA PATRICIA COVAS TERÁN, WILMER MAURICIO RICO ELIZALDE Y HÉCTOR ROMERO DAVID ROSERO DEMANDADO: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –SERVICOOPAVA Y MISIÓN TEMPORAL LTDA RADICACIÓN: 08-001-31-05-005-2017-00190-00 BARRANQUILLA, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), indico:

Se debe indicar que, previo a avocar el conocimiento del presente proceso, se procedió a examinar cada una de las piezas procesales nuevamente remitidas para que se surta la alzada, advirtiéndose que el a quo remitió el expediente a esta superioridad, sin que se hubiese pronunciado sobre el memorial aportado el 1° de junio de 2021, por el demandante Luis Eduardo Carvajal Díaz, donde se le pone de presente sobre el desistimiento de la apelación del auto que negó la nulidad, el cual aparece inserto en el expediente digital, identificado con el nombre “35. 2017 00190 - DESISTIMIENTO DE NULIDAD”, que aparece suscrito por el doctor Jorge Arturo Rivera Tejada en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, motivado precisamente en el artículo 316 del Código General del Proceso y bajo el argumento de que para el momento de la presentación del memorial, a pesar que se efectuó el reparto, el expediente digital aún no había sido remitido ante el superior.

En virtud de la norma procesal invocada, que textualmente reza: “El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario”,

resulta forzoso devolver el expediente de la referencia, para que el Juzgado de origen, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de desistimiento que se presentara respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la nulidad propuesta por el demandante, memorial que fue recepcionado con fecha anterior a que se remitiera el expediente a esta superioridad mediante el correo electronico enviado el día 28 de junio de 2021.

Con base en lo anterior, por la Secretaría de la Sala, devuélvase las actuaciones al juzgado de origen, para lo de su cargo.

Es el mismo error que hoy cometen por tanto usted debe decidir señor JUEZ.

PRETENSIONES

DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE REPONER EL AUTO FECHADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y ASUMIR CONOCIMIENTO INMEDIATO CON LA PRONTITUD QUE REQUIERE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR PUES NO ES DE RECIBO QUE NO SE TENGA COMPETENCIA DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS INDICADOS.

ANEXOS

- **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA UNO DE DECISIÓN LABORAL REF: PROCESO: ORDINARIO LABORAL DEMANDANTE: LUIS EDUARDO DÍAZ CARVAJAL, ROSANA CECILIA BERDUGO ESCAMILLA, MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO SÁNCHEZ, LILIANA PATRICIA COVAS TERÁN, WILMER MAURICIO RICO ELIZALDE Y HÉCTOR ROMERO DAVID ROSERO DEMANDADO:**

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –SERVICOOPAVA Y MISIÓN TEMPORAL LTDA
RADICACIÓN: 08-001-31-05-005-2017-00190-00 BARRANQUILLA,
DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

- TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA – VALLE DEL CAUCA ACCIÓN DE TUTELA PROMOVIDA POR JUAN CARLOS MONTAÑO CASTILLO CONTRA EL JUZGADO 3° CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, TRÁMITE AL CUAL SE VINCULÓ A LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA, LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE BUENAVENTURA, LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, SURA ARL Y EL JUZGADO 2° CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BUENAVENTURA. RADICACIÓN: 76-111-22-13-001-2017-00292-00 INSTANCIA: PRIMERA INSTANCIA (2017-1018) PONENTE: MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 201.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES



AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.

Mail: jrivatejada@hotmail.com.

Celular: 3008397537



JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
C.C 72.346.928 de Barranquilla
T.P 240.432 del C.S.J

	<p style="text-align: center;">TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL BUGA – VALLE DEL CAUCA</p> <p style="text-align: center;">OFICIOS SECRETARIA SALA CIVIL FAMILIA - TUTELA</p>	
---	---	---

Nuevo correo electrónico salaciviltutelas@gmail.com

Oficio SC F No. 09.859

Guadalajara de Buga, 03 de octubre de 2017

Doctor
HENRY BERNARDO HURTADO
Juez 3 Civil del Circuito
Buenaventura, Valle

Ref. Acción de Tutela
De: JUAN CARLOS MONTAÑO CASTILLO
Contra: JUZGADO 3 CIVIL DEL CTO. DE B/VENTURA Y OTROS
Radicación: 76-111-22-13-001-2017-00292-00
Primera Instancia

Fin notificarle, atentamente remito copia del FALLO proferido en el asunto de la referencia.

Atentamente,


JAVIER ARBOLEDA SANCHEZ
Secretario

Elaboró: Juan Lozano

¡Comprometidos con la calidad!
Calle 7 No. 14-32, Oficina 206 - Teléfono (072) 2375519 Fax (072) 2375500
correo electrónico salaciviltutelas@gmail.com



República de Colombia
Tribunal Superior de Buga
Sala Civil Familia

Guadalajara de Buga, 28 de septiembre de 2017

Referencia: **ACCIÓN DE TUTELA** promovida por Juan Carlos Montaña Castillo contra el Juzgado 3° Civil del Circuito de Buenaventura, trámite al cual se vinculó a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, la Inspección del Trabajo de Buenaventura, la Dirección Territorial del Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo, Sura ARL y el Juzgado 2° Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura.
Radicación: 76-111-22-13-001-2017-00292-00
Instancia: PRIMERA INSTANCIA (2017-1018)
Ponente: **MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA**

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala mediante Acta No. **178** de la fecha

De conformidad con la competencia prevista en los arts. 37 y 1 de los Decretos 2591 de 1991 y 1382 del 2000, respectivamente, procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela de la referencia, en la cual se solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, entre otros, presuntamente vulnerados por el extremo accionado.

I. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

1.1. La acción de tutela propuesta

El petente reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, entre otros, presuntamente vulnerados por el extremo accionado. En sustento de lo anterior, adujo que impetró acción de tutela contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura ante el despido que, a su juicio, fue injustificado, y cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado 2° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura. Que mediante fallo n°. 52 del 27 de junio de 2017 se ampararon sus garantías superiores y se ordenó a la accionada que procediera a reintegrarlo;

no obstante, el mencionado proveído fue revocado por el Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura mediante sentencia n°. 53 del 8 de agosto de 2017 al considerar que la situación fáctica por la cual se había concedido el amparo cambió, al existir la resolución mediante la cual el inspector del trabajo valoró la causal objetiva invocada para el despido, estimando que la misma se configuraba.

Agregó que por lo anterior, la Sociedad hoy accionada procedió a despedirlo e indemnizarlo omitiendo que la resolución 201700334 del 12 de julio de 2017 aún no se encuentra en firme, amén de haberse impetrado en su contra los recursos de reposición y en subsidio apelación, encontrándose pendiente de resolver el último de estos. Adujo que no se configura la temeridad por cuanto la presente acción se *sustenta en hechos nuevos sobre los cuales no pudo haber pronunciamiento por parte de los despachos judiciales.*

Adujo que solicitó la nulidad de la sentencia de tutela proferida en segunda instancia, pero el Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura no la tramitó bajo el argumento que la misma fue remitida a la Corte Constitucional.

Bajo el anterior contexto, acudió al juez de tutela con el fin de lograr el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la Sociedad Portuaria de Buenaventura que *proceda a reintegrar al accionante a un cargo de igual o superior jerarquía sin solución de continuidad.* Asimismo, que ante la falta de trámite de la solicitud de nulidad se ordene al Juez 3° Civil del Circuito que *proceda a adoptar todas las medidas necesarias para hacer cesar todo efecto jurídico de cualquier providencia o decisión que se haya emitido en atención a lo resuelto (fls. 1 a 76, c. 1).*

1.2. Trámite impreso e intervención de los sujetos procesales

Repartido el asunto a esta Sala se dispuso su admisión y se vinculó a la Inspección del Trabajo de Buenaventura, a la Dirección Territorial del Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo, a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, a la Inspección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, a Sura ARL y al Juzgado 2° Civil Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Buenaventura (fl. 318, ib.).

La secretaria del Juzgado 3° Civil del Circuito de Buenaventura manifestó que su titular se encuentra incapacitado. Igualmente, remitió copia del fallo proferido al interior de la acción de tutela radicada 2017-0083-00 (fl. 328, ib.).

La apoderada judicial de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana SA informó que el señor Juan Carlos Montaña Castillo estuvo afiliado entre el periodo de 31 de julio de 2006 y 23 de mayo de 2015, encontrándose actualmente en estado de retirado. Adujo no estar vulnerando los derechos invocados por cuanto sus obligaciones se circunscriben a riesgos laborales (fls. 339 a 341, ib.).

Helmer Antonio Atehortua en su calidad de Inspector de Trabajo de Buenaventura expresó que la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial del Valle del Cauca mediante resolución del 12 de julio de 2017 resolvió la solicitud de autorización para terminación del vínculo laboral del señor Montaña Castillo, sin embargo, la mentada resolución no se encuentra en firme por cuanto no se ha resuelto el recurso de apelación que contra la misma se interpuso (fls. 349 a 351, ib.).

El titular del Juzgado 2° Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple realizó un breve recuento de lo acontecido en el discurrir procesal de la primigenia acción constitucional impetrada por Montaña Castillo, enfatizando en que se tramitó *bajo los apremios constitucionales y legales por lo que no se avizora vulneración al debido proceso*.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

Con la intencionalidad de garantizar los principios de buena fe y economía procesal, y para evitar el uso desmedido de la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 en su art. 38 dispuso que era contrario al Ordenamiento Superior el uso abusivo e indebido del mecanismo de amparo, que se concreta en la duplicidad del ejercicio de este entre las mismas partes, bajo los mismos supuestos de hecho y con el mismo objeto. Concretamente se preceptuó que *cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela se presente por la*

misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

La Corte Constitucional ha establecido que la *temeridad* consiste en la interposición de tutelas idénticas, *sin motivo expresamente justificado, contrariando el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política; por lo tanto su prohibición busca garantizar la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la Administración de Justicia* (T-001 de 2016).

En sentencia T-099 de 2000 la Corporación en cita describió la actuación temeraria como:

"(...) aquella contraria al principio constitucional de la buena fe (C.P., artículo 83). En efecto, dicha actuación, ha sido descrita por la jurisprudencia como "la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso." En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte como aquella que supone una "actitud torticera", que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa", que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción", o, finalmente, constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".

Sobre el tópico en trato, se ha enfatizado que la actuación temeraria contraría el principio de buena fe constituye una forma de abuso del derecho porque se asume una actitud indebida para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela (T-1215 de 2003).

Para identificar si dentro del curso de una acción de tutela se configura la temeridad, la máxima intérprete de la Carta Política ha precisado que deben demostrarse los siguientes parámetros (T-1103 de 2005): i) identidad de partes, ii) identidad de causa petendi, iii) identidad de objeto y iv) excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Veamos lo que se ha desarrollado en torno a los mencionados ítems:

"(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a

través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales.

(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa.

(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental.

(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la interpretación del tenor literal de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual: "Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes".

Importa destacar que jurisprudencialmente se ha sostenido que no se configura la temeridad pese a la existencia de identidad de las partes, pretensiones y objeto, cuando la segunda acción se funda: 1) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, 2) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, 3) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y 4) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional (T-169 de 2011).

De manera que la presentación de dos o más acciones de tutela no constituye automáticamente una actuación arbitraria, sino que se hace necesario verificar las circunstancias que rodean cada caso para inferir que se configura temeridad, razón por la cual se debe entender esta figura como una alternativa procesal con la que cuenta el juez constitucional de manera muy excepcional, pues ante todo debe asegurar la garantía efectiva de los derechos fundamentales (T-001 de 2016).

En el caso concreto Juan Carlos Montaña Castillo en esta oportunidad solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, entre otros, y que se ordene a la sociedad accionada proceder a reintegrarlo sin solución de continuidad a un cargo de igual o mayor jerarquía al que venía desempeñando, pues su despido se materializó con la anuencia realizada por el inspector del trabajo mediante resolución 201700334 del 12 de julio de 2017, pero omitiendo que la misma no está en firme al pender la decisión de la Directora Territorial del Valle del Cauca del Ministerio del trabajo en virtud de la alzada impetrada.

Adicional a lo anterior y como consecuencia de no haber tramitado la solicitud de nulidad presentada al interior de la acción constitucional radicada 2017-0075-01, se ordene al Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura que adopte las medidas necesarias para hacer cesar todo efecto jurídico de *cualquier providencia o decisión que se haya emitido en atención a lo resuelto.*

Del material probatorio obrante en el expediente, encuentra la Sala que, en efecto, el señor Juan Carlos Montaña Castillo interpuso acción de tutela contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura, porque el 5 de mayo de 2017 decidió terminar unilateralmente su contrato de trabajo sin que existiera la previa autorización del inspector del trabajo -al ser una persona en situación de discapacidad-, pues aquella, según la intervención del Ministerio del Trabajo, se encuentra pendiente de ser revisada y firmada por el respectivo coordinador.

Mediante sentencia n°. 52 del 27 de junio de 2017 el Juez 2° Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple amparó los derechos fundamentales invocados, a vuelta de considerar que *si bien se encuentra en trámite la autorización de despido ante el Ministerio de Trabajo para obtener el permiso para desvincular al accionante (...) y por negligencia administrativa aún no se ha dado el esperado concepto, lo cierto es que para el Despacho la situación médica del accionante al momento de la desvinculación laboral lo convierte en titular de los beneficios establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y por ende la SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA estaba obligada a esperar la autorización necesaria para desvincular a un*

trabajador en situación de debilidad manifiesta por causa de su estado de salud; por consiguiente, ordenó a la sociedad accionada que procediera a reintegrarlo.

Recurrida la decisión, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Buenaventura mediante providencia del 8 de agosto de 2017 revocó la sentencia precedentemente mencionada, al considerar que la situación por la cual se concedió el amparo cambió en virtud a que, en la ampliación de la impugnación presentada por la sociedad accionada, se allegó copia de la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de 2017 sin que se allegara prueba concerniente a que se ejercieron los recursos procedentes contra el mentado acto administrativo *y por lo tanto no le queda otro camino a este despacho que revocar en su totalidad la sentencia No. 052 de Dos Mil Diez y Siete.*

El 14 de agosto del corriente año, Juan Carlos Montaña Castillo solicitó al Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura que decretara la nulidad de las actuaciones surtidas en segunda instancia, porque la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de la misma anualidad aún no se encontraba en firme, habida cuenta que el 8 de agosto de 2017 presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación. El anterior pedimento no fue tramitado por la autoridad judicial hoy accionada, al estimar mediante auto del 16 mismo mes y año que *carece de competencia para suplir la actividad procesal solicitada por parte del tutelante*, por cuanto el expediente fue remitido el día 14 del mes y año en curso, a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión y es a esta a que le corresponde decretar la nulidad procesal.

Del contexto que precede, nítidamente emerge que la presente acción de tutela es improcedente **únicamente** respecto de las pretensiones direccionadas contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura, pues existe identidad en cuanto a sus partes, causa petendi y objeto, sin que en la actual solicitud tuitiva sobresalga una circunstancia nueva que avale la duplicidad de lo pretendido.

Nótese, que en la primigenia acción constitucional impetrada por Montaña Castillo fue dirigida contra la Sociedad Portuaria de Buenaventura con la intención de lograr su reintegro, al considerar que su despido fue ineficaz al haberse efectuado

sin el permiso de la autoridad administrativa competente por ser una persona en situación de debilidad manifiesta. Esta situación fue objeto de análisis por parte del Juez 2° Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple al estimar que la tantas veces mencionada sociedad debía esperar a que el Ministerio del Trabajo resolviera sobre la solicitud de autorización para despedir al actor, pues aquella se encontraba en trámite, y si bien erróneamente –como a posterioridad se explicará– el Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura consideró superada tal situación, este no es un aspecto que avale la protección hoy rogada frente al actuar de la Sociedad accionada, **pues el mismo sí fue valorado, con criterios diferentes, por los dos juzgadores mencionados.**

En esta ocasión Juan Carlos Montaña Castillo deprecia el amparo de sus garantías superiores, por cuanto la resolución n°. 201700334 que fue proferida el 12 de julio de 2017 no se encuentra en firme, ante los recursos que impetró el 8 de agosto del mismo año, aspecto que fue confirmado por el Inspector del Trabajo de Buenaventura al momento de ejercer su derecho a la defensa y contradicción, cuando manifestó que ya se resolvió el recurso de reposición, pero no el de apelación por parte de la Directora Territorial del Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo.

Ciertamente, en ambas solicitudes tuitivas se encuentran involucradas –a excepción del Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura hoy accionado– las mismas partes, las circunstancias fácticas son las mismas pues los debates giran en torno a la eficacia de un despido efectuado sin el permiso de la autoridad administrativa competente, pues hasta la fecha, el mismo aún se encuentra en trámite y pende una decisión de fondo, y las pretensiones buscan que se proceda el reintegro a su puesto de trabajo, por cuanto se reúnen los presupuestos necesarios para negar parcialmente el amparo ante su improcedencia.

Ahora, la Sala no puede dejar pasar por alto que el Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura omitió valorar los argumentos expuestos por el hoy actor al solicitar la nulidad de la sentencia proferida en segunda instancia.

En efecto, la justificación realizada por el juzgador en la sentencia n°. 53 del 8 de agosto de 2017 para revocar el amparo concedido, consistió en que no se acreditó

que contra el acto administrativo proferido para autorizar el ya mencionado despido –allegado tan solo en la segunda instancia- se hubieren ejercido los recursos pertinentes; raciocinio frente al que Juan Carlos Montaña Castillo manifestó su discernimiento al presentar el 14 de agosto de 2017 una solicitud de nulidad, porque contra la resolución n°. 201700334 del 12 de julio de 2017 interpuso reposición y en subsidio apelación en la misma calenda en que se profirió el fallo de segunda instancia, esto es, el 8 de agosto del corriente año.

El yerro del juzgador no solo brota al dar por finalizado un trámite en virtud de una resolución que se encontraba en término de ejecutoria y que fue recurrida el mismo día en que se profirió la sentencia de tutela de segunda instancia, sino también al proferir el auto del 16 de agosto de 2017 a través del cual no se pronunció respecto de la solicitud de nulidad elevada por Juan Carlos Montaña Castillo, al estimar que carece de competencia porque remitió el 14 de agosto de 2017 –misma calenda en la que se presentó la solicitud de nulidad- el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior decisión, vulnera las prerrogativas constitucionales de Juan Carlos Montaña Castillo al no resolverse de fondo su solicitud de nulidad de la sentencia proferida en segunda instancia, pues con tal pedimento, en voz de la Corte Constitucional, se busca *ofrecer una garantía ante la vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del derecho a la defensa, siempre que exista una circunstancia de tal magnitud que cause la pérdida de eficacia del acto conclusivo del proceso, originando, por justa causa, la inaplicación de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, certeza del derecho y confianza legítima que, por regla general, amparan a la sentencia al ser el acto que finaliza un proceso* (A. 003 de 2011).

Es que, tal y como lo ha sostenido la máxima intérprete de la Carta Política, los procesos de tutela pueden adolecer de vicios que afectan su validez, situación que ocurre cuando el juez omite velar por el respeto al debido proceso de las partes e intervinientes del procedimiento. Ese deber es exigible al juez constitucional, en la medida que este se encuentra vinculado a los principios de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y

a la economía procesal; y que en las nulidades ocurridas en los procesos de tutela la norma aplicable y vigente es Ley 1564 de 2012 (T-661 de 2014).

Lo anterior para significar que la actuación del Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura es vulneradora del derecho fundamental al debido proceso de Juan Carlos Montaña Castillo, al no imprimirle trámite legal a la solicitud de nulidad presentada por este, siendo que la norma aplicable (Ley 1564 de 2012 –CGP–) estipula que las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren en ella, y el juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias (art. 134 ejusdem).

En suma, la Sala negará el amparo deprecado frente a la Sociedad Portuaria de Buenaventura al estructurarse los presupuestos que jurisprudencialmente se han decantado para considerar que la segunda solicitud tuitiva es improcedente. Y otorgará la protección del derecho fundamental al debido proceso por cuanto se ve comprometido con la actuación desplegada por el Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura, al no resolver de fondo la solicitud de nulidad presentada por Juan Carlos Montaña Castillo.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero. NEGAR POR IMPROCEDENTE el amparo solicitado respecto de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, atendiendo la parte motiva de esta sentencia.

Segundo. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Juan Carlos Montaña Castillo; en consecuencia, se deja sin valor el auto proferido por el Juez

3° Civil del Circuito de Buenaventura el 16 de agosto de 2017, mediante el cual negó tramitar la nulidad solicitada por el señor Montaña Castillo.

Tercero. ORDENAR al Juez 3° Civil del Circuito de Buenaventura que dentro del improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a estudiar y resolver de fondo la solicitud de nulidad que el 14 de agosto de 2017 presentó Juan Carlos Montaña Castillo contra la sentencia de tutela n°: 53 del 8 del mismo mes y año.

Cuarto. NOTIFICAR a todos los sujetos procesales la presente decisión por el medio más expedito y, en caso de no presentarse una oportuna impugnación, **REMITIR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,



MARÍA PATRICIA BALANTA MEDINA



FELIPE FRANCISCO BORDA CAICEDO



JUAN RAMÓN PÉREZ CHICUÉ

REF: PROCESO: ORDINARIO LABORAL **DEMANDANTE:** LUIS EDUARDO DÍAZ CARVAJAL, ROSANA CECILIA BERDUGO ESCAMILLA, MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO SÁNCHEZ, LILIANA PATRICIA COVAS TERÁN, WILMEER MAURICIO RICO ELIZALDE y HÉCTOR DAVID ROSERO ROMERO **DEMANDADO:** AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –SERVICOOPAVA y MISIÓN TEMPORAL LTDA
RADICACIÓN: 08-001-31-05-005-2017-00190-00<70.014>

INFORME SECRETARIAL

Señora Magistrada,

Le informo que el 28 de octubre de 2021, fue enviado por parte de la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el proceso de la referencia, con las actuaciones requeridas en el auto del 22 de julio de 2021, correspondiente a las audiencias de los artículos 77 y 80 del C.P.T.S.S. No obstante, se observa que el 1 de junio de 2021, el apoderado de la parte demandante presentó desistimiento parcial de la apelación a la solicitud de nulidad, únicamente respecto del señor Luis Eduardo Carvajal Díaz, fecha previa a la remisión del presente proceso a la Secretaría de este Tribunal.

Sírvase proveer,

Barranquilla, 17 de noviembre de 2021

LAURA PENSO ATENCIA

Auxiliar Judicial Grado I

REPÚBLICA DE COLOMBIA- RAMA JUDICIAL



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA
SALA UNO DE DECISIÓN LABORAL**

REF: PROCESO: ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE: LUIS EDUARDO DÍAZ CARVAJAL, ROSANA CECILIA BERDUGO ESCAMILLA, MAYRA ALEJANDRA AVENDAÑO SÁNCHEZ, LILIANA PATRICIA COVAS TERÁN, WILMER MAURICIO RICO ELIZALDE y HÉCTOR DAVID ROSERO ROMERO

DEMANDADO: AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO –SERVICOOPAVA y MISIÓN TEMPORAL LTDA

RADICACIÓN: 08-001-31-05-005-2017-00190-00<70.014>

Barranquilla, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Se debe indicar que, previo a avocar el conocimiento del presente proceso, se procedió a examinar cada una de las piezas procesales nuevamente remitidas para que se surta la alzada, advirtiéndose que el a quo remitió el expediente a esta superioridad, sin que se hubiese pronunciado sobre el memorial aportado el **1º de junio de 2021**, por el demandante Luis Eduardo Carvajal Díaz, donde se le pone de presente sobre el desistimiento de la apelación del auto que negó la nulidad, el cual aparece inserto en el expediente digital, identificado con el nombre “35. 2017-00190 - DESISTIMIENTO DE NULIDAD”, que aparece suscrito por el doctor Jorge Arturo Rivera Tejada en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, motivado precisamente en el artículo 316 del Código General del Proceso y bajo el argumento de que para el momento de la presentación del memorial, a pesar que se efectuó el reparto, el expediente digital aún no había sido remitido ante el superior.

En virtud de la norma procesal invocada, que textualmente reza: “*El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario*”,

resulta forzoso devolver el expediente de la referencia, para que el Juzgado de origen, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de desistimiento que se presentara respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la nulidad propuesta por el demandante, memorial que fue recepcionado con fecha anterior a que se remitiera el expediente a esta superioridad mediante el correo electronico enviado el día **28 de junio de 2021**.

Con base en lo anterior, por la Secretaría de la Sala, devuélvase las actuaciones al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


CLAUDIA MARÍA FANDIÑO DE MUÑIZ
Magistrada Ponente
08-001-31-05-005-2017-00190-00<70.014>